

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto remitido se enmarca dentro del proceso de reforma de la normativa sobre mercado de valores que pretende acabar, en la medida de lo posible, con el excesivo carácter reglamentista del vigente texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, siguiendo el criterio señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen 319/2018, en el que se destacaba cómo una regulación ordenada de los mercado de valores hubiera exigido una ley de nueva planta que contuviera las normas y principios básicos, remitiendo a la vía reglamentaria el desarrollo pormenorizado en tantos reglamentos como fueran necesarios.

De este modo, y con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica, se han elaborado un anteproyecto de ley y tres proyectos de real decreto, teniendo el presente por objeto sintetizar y actualizar la normativa vigente, en concreto en lo que respecta a la representación de valores negociables, la admisión a negociación de valores negociables y el régimen jurídico aplicable a los centros de negociación y a las infraestructuras de mercado de poscontratación.

Por otro lado, el proyecto transpone la Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19.

Tal y como se señala en el Informe 66/2021, referente al Anteproyecto de Ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, teniendo en cuenta que su finalidad primordial es la de proceder a una deslegalización de gran parte de sus preceptos para incluirlos en los correspondientes reglamentos de desarrollo, por lo que se refiere a los tratamientos de datos de carácter personal debe tenerse presente la doctrina constitucional, recogida, entre otras, en las Sentencias 292/2000 y 76/2019, de acuerdo con la cual los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas.

Por consiguiente, en el nuevo esquema planteado de una ley marco y reglamentos de desarrollo, los aspectos esenciales que afecten a los tratamientos de datos de carácter personal deberán quedar recogidos en la norma legal, sin perjuicio de su ulterior desarrollo, dentro de los límites legales, por los correspondientes reglamentos, conforme a la doctrina constitucional anteriormente señalada.

En el presente caso, el cumplimiento de dichos requisitos se encuentra en el citado Anteproyecto de Ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, o, en su caso, en otras normas legales como la Ley de Sociedades de Capital (a la que se remite el artículo 25 del proyecto al regular el suministro de datos a las entidades emisoras sobre la identidad de sus accionistas) limitándose el presente proyecto de real decreto a su desarrollo sin que se aprecie, por parte de esta Agencia, extralimitaciones en dicho desarrollo o el establecimiento de nuevos tratamientos de datos personales que requerirían de norma con rango de ley.